

El desalojo de los vendedores ambulantes: paralelismos históricos en la ciudad de México

JOHN C. CROSS*

Resumen: Aproximadamente 10 000 vendedores ambulantes de las calles del centro histórico de la ciudad de México acaban de ser reubicados a mercados recién construidos. Esta operación se compara con el ingente programa de construcción de mercados que llevó a cabo Ernesto P. Uruçhuru durante su administración como regente de la ciudad desde 1952 hasta 1966. Este artículo investiga dicho paralelismo al analizar detalladamente las políticas y prácticas de Uruçhuru hacia los vendedores ambulantes. Se argumenta que tales políticas tuvieron el efecto de politizar el ambulante al obligar a los vendedores a organizarse dentro del PRI y al establecer una serie de prácticas que garantizaban básicamente los derechos que dichos comerciantes organizados tenían de pasar a los mercados.

Abstract: The recent relocation of about 10 000 ambulatory vendors from the streets of Mexico City's Historical Center into newly constructed markets, has been compared to the massive market construction program carried out by Ernesto P. Uruçhuru during his regency from 1952 to 1966. This article investigates this parallel by looking closely at the policies and practices of Uruçhuru with reference to street vendors. It is argued that these policies had the effect of politicizing street vending by forcing vendors to organize within the PRI and established a series of practices that essentially guaranteed the rights of such organized vendors to markets.

AÚLTIMAS FECHAS, EL DEPARTAMENTO del Distrito Federal (DDF) concluyó uno de los operativos políticamente más delicados del sexenio de Salinas de Gortari: la reubicación de aproximadamente 10 000 vendedores ambulantes de las calles del centro histórico hacia casi 40 mercados. El proceso ha sido largo y penoso. La planeación en un sentido amplio se remonta a más de una década y queda plasmada en los múltiples estudios realizados en dicho período acerca del tipo, cantidad y ubicación de los vendedores. El terremoto de 1985 hizo que diversos organismos se dieran a la tarea de investigar si los vendedores podían ser ubicados en los predios urbanos que quedaran disponibles una vez que se derrumbaran o se inutilizaran los edificios afectados por el terremoto. Sin embargo, la verdadera planeación no comenzó sino hasta después de las elecciones.

* Quiero agradecer el apoyo prestado por David López de UCLA, Francisco Marmolejo y Fernando González de la Universidad de las Américas, así como al licenciado Alcántara de Coabasto por haber aportado valiosa información de esa institución. Esta investigación fue auspiciada por el Programa de la UCLA sobre México, la National Science Foundation, el Programa Fulbright U. S.-Mexico y la Organización de Estados Americanos. Dirigir correspondencia a The American University in Cairo, P.O. Box 2511, Cairo, Egypt 11511; tel. 354-2964; fax: 355-7565; E-mail: Cross @ auc-ac.s.eun.eg.

[95]

nes de 1991, cuando el voto abrumadoramente favorable al PRI dio al gobierno una relativa libertad de acción para manejar a los vendedores, quienes se contaban entre sus partidarios políticos más leales durante la crisis económica y política de los años ochenta.¹

Este reciente logro parece más notable ante el rotundo fracaso en los intentos del gobierno de la ciudad por controlar al ambulante en las últimas décadas, a medida que la cantidad de vendedores ambulantes ha ido aumentando pese a las docenas de propuestas administrativas para limitar o revertir dicho crecimiento. Incluso la negativa del DDF a conceder nuevos permisos a los vendedores ambulantes desde 1984, así como la formación de la Coordinación de Abasto Popular (Coabasto) al año siguiente para organizar y reducir este fenómeno, no evitaron que la cantidad de vendedores se duplicara en la siguiente década, por lo regular con el conocimiento e incluso el apoyo de los funcionarios elegidos y administrativos.²

La dificultad para controlar al ambulante ha hecho que muchos observadores califiquen a los vendedores de la calle como a una "mafia" capaz de manipular a las autoridades a hacer su voluntad (Baca, 1990), y muchos funcionarios reconocen en privado que los líderes de los vendedores se encuentran tan bien organizados políticamente que resulta sumamente complicado que los organismos de la ciudad operen por sí mismos para tomar medidas efectivas contra dichos comerciantes. Los líderes de los vendedores ambulantes hacen ostentación de sus relaciones con políticos y funcionarios de alto nivel, en tanto que algunos de ellos han sido elegidos para desempeñar cargos oficiales o han sido invitados, junto con otros dignatarios locales, a las recepciones presidenciales.³ El poder de los líderes se basa en el hecho de que, posiblemente más que en cualquier otra ciudad del mundo, los vendedores de la ciudad de México están extraordinariamente bien organizados, ya que la política de la ciudad consiste en aportar "tolerancias" a los vendedores que se han unido a una organización anterior o que han formado una nueva. Así pues, los líderes de las diversas organizaciones, algu-

¹ Comparemos, por ejemplo, las recomendaciones de un informe del DDF (1990), que habría dado a la mayoría de los vendedores ambulantes en la calle, con propuestas posteriores de construir mercados (DDF, 1991; 1992: DDF-Secretaría de Gobierno, 1992). Para un comentario político sobre el cambio de actitud después de 1991 hacia el sector "popular" como conjunto, consúltese Monge, 1993.

² Por ejemplo, la cantidad de tianguis —mercados que a menudo operan en un circuito en el que aparecen en distintos barrios cada día de la semana—, aumentó de 669 a 1 061 entre 1985 y 1991; mientras que la cantidad de locales en los mercados aumentó de 84 586 a 152 003 en el mismo período, pese a los constantes esfuerzos y programas por parte de Coabasto para evitar cualquier aumento, por insignificante que fuera (DDF-Coabasto, 1985 e informes internos).

³ Todos los líderes importantes ostentan fotografías tomadas en reuniones populares, manifestaciones y conferencias con diputados federales, senadores y, en algunos casos, incluso con el presidente. Esto sirve, en parte, para impresionar a sus partidarios, pero en buena medida proyecta una realidad. Guillermina Rico, la líderesa más importante del centro histórico, ha sido activamente cortejada por el PRI mediante invitaciones a Los Pinos, la residencia presidencial, al igual que con la posición de "suplente" ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Otros líderes han tenido también un cargo público, algunos de ellos en la oposición, como Celia Torres, cuya Confederación de Comerciantes y Organizaciones Populares (CCOP), con aproximadamente 5 000 miembros de tianguis, constituyó un apoyo considerable para la campaña de 1988 de Cuauhtémoc Cárdenas.

nas de ellas con hasta 7 000 elementos, pueden obligar a sus miembros a pagar altas cuotas y a acudir a las manifestaciones políticas mediante la amenaza de suspender o cancelar su calidad de miembros, lo cual les impediría vender sus mercancías en la vía pública. En múltiples ocasiones el autor ha sido testigo de tales prácticas, las cuales constituyen una fuente permanente de comentarios y quejas por parte de los propios vendedores.⁴

Aunque hasta ahora la reubicación en el centro histórico parece un éxito, de todos modos ha dejado a unos 180 000 vendedores en las calles del Distrito Federal entre “puestos fijos”, “semifijos”, “toreros” y “tianguis” de las colonias y zonas comerciales en el resto de la ciudad.⁵ Si el DDF quiere retirar el ambulante de todo su territorio (como parece ser el caso según mis propias entrevistas personales a funcionarios de alto nivel del DDF a lo largo de los últimos dos años, y como el licenciado Albores Guillén, director de Coabasto, comentara al *Wall Street Journal* el 16 de noviembre de 1993, p. A18), tendrá que hacer frente a este problema mayor. El que pueda hacerlo dependerá tanto de la comprensión que tenga del propio comercio ambulante como de la historia de las relaciones entre vendedores ambulantes y el Estado.

Este artículo se centrará en el segundo punto. Mediante el análisis del último período histórico en el que los vendedores ambulantes fueron efectivamente reubicados de las calles a los mercados durante la administración de Ernesto P. Uruchurtu como regente de la ciudad, mostraré las limitaciones de la política estatal hacia el ambulante. Los principales interrogantes que se plantea dicho análisis son los siguientes: ¿cómo hicieron los funcionarios públicos para reubicar en mercados a los vendedores ambulantes? Y, ¿por qué no funcionaron estas políticas en el largo plazo? Tales preguntas son importantes no sólo porque arrojan luz sobre los problemas que las autoridades de la ciudad enfrentaron en este primer período, sino también porque —como este trabajo argumentará— la dificultad que hoy se plantea para controlar a los vendedores ambulantes, en buena medida surge de los propios mecanismos mediante los cuales el Estado intentó controlar este tipo de comercio durante el período de la administración de Uruchurtu.

Muchos han señalado el paralelismo histórico entre el actual programa de construcción de mercados y el del gobierno de Ernesto P. Uruchurtu, el llamado “regente de hierro”, quien fue la autoridad en el Distrito Federal durante 14 años

⁴ La importancia política de las organizaciones de vendedores ambulantes se ha mencionado, mas no se le ha estudiado de manera sistemática en otros trabajos académicos, por ejemplo en Colombia (Bromley, 1978b), Perú (De Soto, 1989) y Hong Kong (McGee, 1973). Tanto Sanyal (1992) como Escobar Latapí (1990) aportan un análisis general de la significación política de los vendedores ambulantes como un todo.

⁵ Los “locales fijos” son quioscos de metal donde por lo regular se vende comida preparada. Los locales “semifijos” son puestos de estructura metálica que pueden ser desarmados de un día para otro pero que todos los días son armados en el mismo lugar. Los “toreros” son los vendedores verdaderamente ambulantes, la mayoría de los cuales vende a los automovilistas en los semáforos. Los “tianguis” son mercados periódicos que generalmente operan en un circuito y que se presentan en una colonia distinta cada día de la semana. La cantidad aproximada de vendedores ambulantes es un cálculo conservador que se basa en datos tomados de Coabasto e INEGI (1990).

sin precedentes, entre 1952 y 1966. Nombrado regente de la ciudad en tres períodos presidenciales consecutivos, Uruchurtu dejó su huella (entre otras cosas) al construir 150 mercados que dieron cabida a casi 55 000 vendedores ambulantes durante su gestión. Sus métodos aplicados para “modernizar” a la ciudad de México a menudo fueron brutales: hostigamiento, detención ilegal y violencia física contra vendedores ambulantes y “paracaidistas”, invasores de terrenos cuya ocupación ilegal había sido acicateada por los estrictos límites que Uruchurtu había impuesto al crecimiento de la zona urbana de la ciudad pese al rápido crecimiento de la población (Cornelius, 1975). De hecho, Uruchurtu fue retirado del cargo después de ordenar el desalojo de una comunidad que había “invadido” terrenos, lo cual indica el alto nivel de conflicto entre su administración y las actividades “informales” de subsistencia de los pobres.

No obstante, aunque las acciones autoritarias hacia los miembros más pobres de la sociedad finalmente acarrearón su caída, las clases medias y altas lo consideraron de todos modos una figura política ideal. Para ellas, el orden impuesto por Uruchurtu —por brutal que hubiera sido— tenía mérito propio. Como lo reconociera un editorial del periódico *Excelsior*, después de que un Congreso instigado por la opinión pública exigiera la renuncia del regente:

Recordemos que hasta antes de Uruchurtu los metropolitanos habíamos llegado a creer que la suciedad imperante en nuestros mercados, que la calidad de “zocos” (mercados al aire libre), que tenían nuestras más céntricas calles eran ya parte de nuestra idiosincrasia nacional (*Excelsior*: 9-15-66).

Esta imagen de Uruchurtu, el funcionario que limpiara de vendedores las calles de la ciudad, es con la que gustan compararse los dirigentes políticos actuales. Sin embargo, el fracaso del legado de Uruchurtu salta a la vista en el hecho de que —pese a que los mercados que mandó construir siguen en pie— las calles de la ciudad están otra vez plagadas de vendedores. ¿Es este hecho sencillamente el resultado de una incompetencia burocrática ulterior? ¿O las políticas mismas del regente coadyuvaron a crear los cimientos de las poderosas organizaciones de vendedores que hacen que hoy en día resulte tan complicado el control del comercio ambulante?

EL LEGADO DE URUCHURTU

Primero, es necesario revisar el legado real de Uruchurtu: el programa mismo de construcción de mercados. El ambulante había declinado en la ciudad de México antes de la segunda guerra mundial, cuando cobró nuevos ímpetus como manera de evadir los controles de precios y el racionamiento (Vázquez Torres, 1991). Después de la guerra, el Distrito Federal aprobó una nueva regulación para el comercio ambulante en la que permitía el establecimiento de zonas especiales de venta mediante un procedimiento que iba a ser regulado por la Oficina de Mercados de la Tesorería del DDF. La ley, aprobada en junio de 1951, ha sido

citada como la justificación para evitar este tipo de venta en el “centro histórico” y otras zonas de la ciudad; sin embargo, en la práctica sus disposiciones eran muy liberales. La única prohibición clara se refiere a la venta de ganado en la zona del Zócalo y la colocación de puestos a tres metros de las esquinas. Otras disposiciones, como una sección que prohíbe la “obstrucción del tránsito”, fueron formuladas para interpretarse administrativamente (México, 1951).

Sin embargo, la ley nunca fue puesta en vigor como tal. Después de comenzar su gestión en diciembre de 1952, Uruchurtu sencillamente prohibió, mediante una orden administrativa, la venta de mercancías en la calle. En el lapso de una semana dispuso que 2 100 vendedores desalojaran el centro de la ciudad, por lo que se les pidió reubicarse en un mercado que había sido construido recientemente pero que estaba vacío, pese a que dichas instalaciones (que contaban con 1 000 puestos) estaban lejos de albergar a todos los vendedores desplazados. No obstante, como lo anunciaban entusiastamente los editoriales de los diarios, el nuevo regente parecía haber logrado en unos cuantos días lo que administraciones previas se habían pasado años lamentando no haber conseguido: despejar de vendedores la zona del centro de la ciudad. Antes de cumplir el primer mes en el cargo, amplió la prohibición también al resto de la ciudad. Su estilo autoritario le ganó al nuevo regente la reputación de líder decidido y el sobrenombre de “regente de hierro”. La prensa lo aclamó ampliamente: una caricatura publicada en *Excélsior* lo mostró como jugador de fútbol americano corriendo incontenible hasta la zona de anotación con un balón que decía “Distrito Federal”. La leyenda rezaba: “¡Que no se detenga!”

No obstante, la decisión de terminar con el ambulante se había tomado sin organización o planeación previas, y las repercusiones obligaron a la ciudad a modificar sus planes según la disponibilidad de opciones adecuadas. De los afectados por la prohibición de vender mercancías en ninguna parte de la ciudad, 2 000 de ellos ocuparon las oficinas del edificio del Departamento, y el director de la Oficina de Mercados, Gonzalo Peña Manterola, se vio obligado a buscar personalmente lugares “alternativos” para los vendedores desplazados (*Excélsior*, 18 de diciembre de 1952). De hecho, el DDF tuvo que permitir la venta de mercancías en la vía pública en la mayor parte de las zonas, hasta que pudieran construirse mercados que dieran cabida a los vendedores en instalaciones adecuadas.

Al igual que el gobierno actual, Uruchurtu echó mano de una serie de argumentos retóricos acerca de los “perjuicios” ocasionados por el ambulante para justificar el rigor de la acción contra ellos, frente a la legislación reciente que básicamente legalizaba dicha actividad. En la actualidad, se acusa de todo a los vendedores ambulantes: de causar una competencia “desleal” frente a los almacenes que están “en regla”; de evadir impuestos; de producir contaminación y constituir una amenaza general a la salud pública. Entre los argumentos que Uruchurtu empleaba contra los vendedores ambulantes, su preferido era que obstruían la vía pública y que causaban inflación debido al supuesto efecto del “intermediarismo”.⁶

⁶ El argumento empleado por Uruchurtu, y que sigue siendo repetido por los funcionarios actuales, es que puesto que los vendedores ambulantes con frecuencia compran a semimayoristas e incluso

En vez de simplemente obligar a los vendedores a desistir de vender mercancías en la calle y reubicarlos en supermercados modernos —lo cual habría sido un eficiente manejo del problema percibido como “intermediarismo”—, Uruchurtu puso en marcha un ambicioso programa para construir mercados cubiertos que dieran cabida a los vendedores desplazados por las órdenes mencionadas. Los mercados se construyeron con fondos públicos y fueron rentados a los vendedores a un costo simbólico, según declararon las autoridades, con el propósito de reducir el costo al consumidor final pero, lo que resultaba más importante, para “chantajear” a los vendedores a desalojar las calles sin oponer resistencia. Como explicó un funcionario que en ese entonces entró en el servicio público: con el fin de atraer a los vendedores a que entraran en los mercados, Uruchurtu les regaló refrigeradores, balanzas “[...] e incluso el mantenimiento y cuidado de su mercancía con guardias, luz, agua [...]” y muchas otras necesidades incluidas en sus rentas nominales.

En la zona del mercado de La Merced, en ese entonces el más grande al aire libre de la ciudad, se construyó espacio para 6 727 vendedores. En la zona conocida como La Lagunilla, fueron ubicados 2 036 vendedores, y en la zona comercial de Tepito 4 488 recibieron locales. Todas estas obras fueron inauguradas en 1957 aunque, en algunos casos, ya se contaba con mercados que alojaban a muchos menos vendedores y habían sido reubicados. En general, tan sólo en 1957, 18 414 vendedores fueron reubicados en 36 mercados, y entre 1953 y 1966 se construyó o reconstruyó un total de 174 mercados para 52 070 vendedores, lo cual aumentó la cantidad de mercados en el Distrito Federal de 44 a más de 200. Este nivel de construcción de mercados nunca se ha vuelto a alcanzar, y los mercados construidos durante este período representaron 77.6% de los 67 066 locales de mercados en la ciudad en 1993, 26 años después de Uruchurtu.⁷ Estas cifras incluso subestiman la contribución de Uruchurtu al actual sistema de mercados públicos en la ciudad de México, puesto que más de una docena de ellos se encontraban en el proceso de planeación o construcción final cuando Uruchurtu fue destituido del cargo.

La gráfica 1 da una idea de la inmensidad y singularidad de esta empresa. Muestra la cantidad de locales de venta en mercados y concentraciones inaugurados entre 1953 y 1991 por período presidencial. En los dos primeros períodos, el lapso efectivo de la administración de Uruchurtu (1953 a 1958 y 1959 a 1964), se construyeron 69 y 90 mercados, respectivamente. El primer período de 1953 a 1958 presenta la cantidad más alta de vendedores (29 179 en comparación con los 20 911 del segundo período) debido a las enormes dimensiones de muchos de

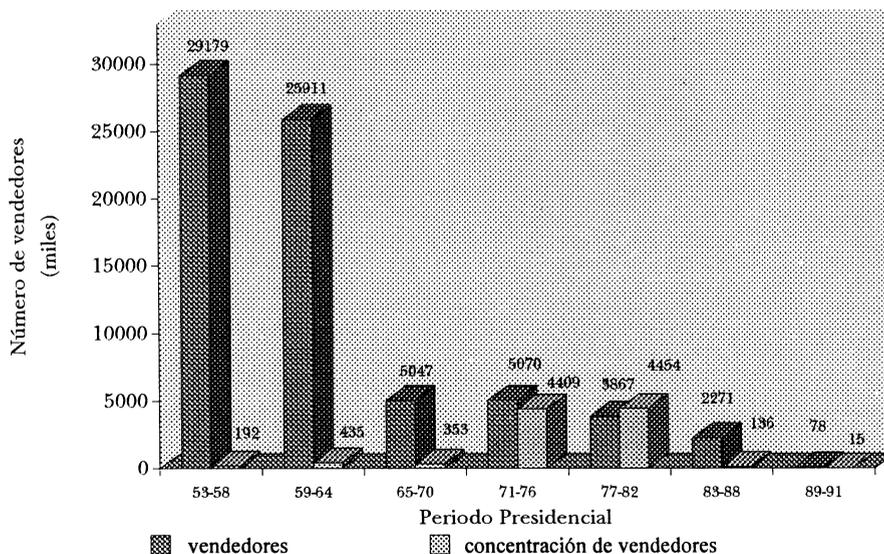
a comerciantes al por menor, deben ser menos eficientes comercialmente pues crean una gran cantidad de “intermediarios” entre el consumidor y los productores, con lo cual al parecer elevan los precios. Sin embargo, lo anterior pasó por alto el hecho de que los vendedores ambulantes son altamente competitivos y tienen grandes plazas de menudeo, entre ellas los supermercados.

⁷ Toda la información referente a la cantidad y fechas de construcción de mercados y concentraciones fue obtenida de DDF-Coabasto, 1991. Este documento incluye la fecha en la cual los mercados o las concentraciones fueron “inaugurados”, así como la información sobre la cantidad de vendedores que congregan.

los mercados. No obstante, después de que Uruchurtu fue retirado del cargo, se redujo drásticamente el papel del DDF en la construcción de mercados. Por el contrario, como lo muestra la gráfica, se hizo un hincapié cada vez mayor en las “concentraciones”, mercados permanentes reconocidos por la ciudad pero que son construidos por los propios vendedores. De hecho, muchos de los “mercados” en el último período en realidad eran concentraciones construidas por los vendedores, las cuales fueron rediseñadas como mercados por funcionarios ansiosos de mostrar su laboriosidad.⁸ Empero, incluso el crecimiento combinado de mercados y concentraciones resulta menos que espectacular a finales de los sesenta y setenta, y los índices de los dos parecen declinar en los ochenta.

GRÁFICA 1

NÚMERO DE VENDEDORES AGREGADOS POR SEXENIO AL SISTEMA DE MERCADOS



FUENTE: Información original de DDF-Coabasto, 1991.

⁸ Por lo regular, las concentraciones están localizadas en las zonas más pobres de la ciudad. Algunas operan en la vía pública, aunque la mayor parte de ellas se han mudado a predios vacíos sobre los que pueden construir. Como ya se observó, algunas resultan finalmente “redesignadas” como “mercados públicos”. Que lo sean de verdad depende tanto de los vendedores de la concentración y de los propios líderes como de las autoridades de la ciudad. Los mercados públicos operan bajo reglas mucho más estrictas que las concentraciones, y son administrados por funcionarios de la ciudad, en vez de por los líderes. En muchos casos, éstos pueden no permitir que las concentraciones se transformen en mercados con el propósito de seguir explotando a los vendedores que se encuentran en su interior, mediante la renta o venta los locales a precios altos.

Pero si el programa de construcción de mercados —con sus unidades de refrigeradores, centros de atención a los niños, seguridad, alumbrado, agua potable y otras “comodidades modernas”— era la zanahoria dispuesta para convencer a los vendedores a desalojar la vía pública, Uruchurtu también blandió un gran garrote: los vendedores que rechazaban o no podían entrar en los mercados tuvieron que hacer frente a la más enérgica represión policial en la historia moderna de la ciudad. Guillermina Rico, quien era demasiado joven para hacerse acreedora a un local en La Merced cuando se construyó el mercado en 1957, explica lo que le sucedió, dado que siguió vendiendo porfiadamente en la vía pública para sostener a su familia:

Entonces, a los que se nos dejó fuera nos quedamos para sufrir: 36 horas, 15 días, arrastres, patadas y golpes [...] Nos dejaban 36 horas en la cárcel, y a los niños los enviaban al orfanatorio [...] Muchos de los vendedores [ambulantes] no habían estado en prisión, pero tuvieron que conocerla por ser comerciantes, por ganarse la vida de manera honrada.

Marta, quien comenzó a vender durante los últimos años de la administración de Uruchurtu, comenta:

[...] no había permiso para vender, así que —desde que llegaban los camiones [del inspector ambulante]— tuvimos que hallar una manera de trabajar temprano: desde las 5 hasta las 7:30 en la mañana porque los camiones llegaban y nos levantaban. Al principio sólo se llevaban a la gente, y las cosas quedaban tiradas en la calle. Sin embargo, más tarde, cuando el gobierno se dio cuenta de que algunos seguían vendiendo, cambió nuevamente su sistema: regresaban y se llevaban toda la mercancía. Nos dejaban en libertad, pero se quedaban con nuestra mercancía. Con todo, se llevaban todo, ya fuera dinero o las cosas, todo lo que encontraban [...]

Parte fundamental del programa de construcción de mercados era un alto grado de represión. Puesto que ya se habían establecido prácticas comerciales en las calles, los vendedores no querían entrar en los mercados a menos que el DDF les garantizara que sus antiguas zonas de venta no iban a ser ocupadas por nuevos vendedores que pudieran arrebatarles a sus clientes. Una vez que se les garantizó que esto no iba a suceder, las asociaciones de vendedores ambulantes convinieron en entrar en masa en los mercados. Generalmente las instalaciones estaban diseñadas y construidas para una sola asociación de vendedores; por lo tanto, los vendedores que habían decidido permanecer en la vía pública se quedaron sin representación o fuerza organizacional alguna que les permitiera resistir la represión ejercida en su contra. Todo lo que podían hacer era intentar librarse de la represión, como lo hicieron estas mujeres.⁹

⁹ No obstante, más tarde tales vendedores se volvieron el núcleo de las poderosas organizaciones de vendedores ambulantes que hay en la actualidad, lo cual ayuda a explicar por qué hay tantas líderes y por qué todas ellas parecen tener caracteres tan templados. Han vivido la represión y han ganado.

FRACASO DEL LEGADO

A pesar del aparente apoyo que la clase media y alta brindaban a sus acciones en contra de los vendedores ambulantes, cuando Uruchurtu fue destituido del cargo en 1966, se detuvieron tanto el programa de construcción como las políticas represivas contra el ambulante. Si hemos de entender por qué dichas políticas no sobrevivieron a Uruchurtu, debemos tener una visión más amplia de los beneficios y de los costos económicos y políticos en los que incurrieron para el sistema político mexicano de la época, así como del papel que tales políticas estaban designadas a desempeñar en la propia carrera de Uruchurtu.

Era amigo cercano del presidente Miguel Alemán, de quien fue compañero en la universidad, jefe de campaña, amigo y confidente. En 1952 el presidente Ruiz Cortines lo nombró regente del Distrito Federal en una maniobra que en gran medida se considera de pacto entre el presidente saliente y el entrante, con el propósito de conservar algunas posiciones poderosas dentro del gabinete para los partidarios de Alemán. Hay menos acuerdo en lo referente al motivo de ser nombrado por López Mateos nuevamente para el cargo seis años después. Una de las posibilidades es que representaba la continuación del poder para Miguel Alemán. Otra explicación sería simplemente que Uruchurtu —él mismo precandidato a la presidencia— se había vuelto tan poderoso que López Mateos no había podido deshacerse de él.¹⁰

López Mateos fue elegido como un candidato de compromiso sobre Uruchurtu, porque este último estaba demasiado identificado con los partidarios de Alemán dentro del gobierno y, por lo tanto, había sido rechazado por los simpatizantes de Cárdenas, el poderoso presidente izquierdista de los años treinta. No obstante, era un presidente débil, dominado por los alemanistas y cardenistas de su gabinete. Por otra parte, Uruchurtu tenía un largo historial en puestos administrativos en el PRI, en el gobierno estatal y el nacional y contaba con un poderoso cuadro de aliados.

En 1964, Uruchurtu fue nuevamente precandidato por el PRI a la presidencia. No obstante el elegido fue Gustavo Díaz Ordaz, y muchos argumentan que las tensiones entre los dos fueron evidentes desde el principio, aunque Uruchurtu fue nombrado otra vez regente de la ciudad. Pese a que su posición conservadora era similar a la de Díaz Ordaz, su poder como regente y tras bambalinas llegó a ser una amenaza para la autoridad del presidente. Como señala un trabajo académico sobre el análisis del conflicto entre estas dos figuras políticas:

Un presidente conserva generalmente la expectativa de que sus colaboradores no se excedan en su poder, para que él pueda destacar personalmente (Lerner de Scheinbaum y Ralsky de Cimet, 1976:395).

¹⁰ Consúltense Camp (1976); Davis (1994); Hofstadter (1974); Gómez Castro (1963) y Ward (1990) si se desea más información sobre la carrera de Uruchurtu. Para conseguir datos acerca del sistema político mexicano en conjunto, véase también Camp (1980, 1990, 1993); De la Peña (1992); González Casanova (1965); Smith (1979) y Story (1986).

Sin embargo, resulta muy significativo que la caída final de Uruchurtu fuera precipitada por sus continuas políticas en contra de los movimientos ligados a la economía informal dentro de la ciudad capital. Además de sus ataques en contra de los vendedores ambulantes, a Uruchurtu también se le conocía por su feroz represión contra los invasores de predios, quienes frustraron su intento de limitar el crecimiento económico e impusieron altos costos a la ciudad por la compra de terrenos y suministro de servicios urbanos en zonas que a menudo sólo eran marginalmente habitables o virtualmente inservibles, debido a sus características topográficas o a las condiciones de la tierra. Empero, su práctica de ordenar que dichas comunidades fueran arrasadas resultó impopular y causó muchos problemas ideológicos al PRI. Cuando el DDF arrasó a una comunidad de 400 invasores de predios durante un aguacero, cuatro días antes del Grito de Independencia, el 15 de septiembre de 1966, los miembros del Congreso se unieron para denunciar el acto y el PRI hábilmente distanció a Uruchurtu del presidente antes de censurarlo y obligarlo a renunciar. Durante el debate en el Congreso, se manejó que los invasores de predios y los vendedores ambulantes eran víctimas nobles de la crueldad de las políticas de Uruchurtu. Un columnista señaló que los ataques en contra de los vendedores ambulantes formaban parte del “mandato dictatorial” de Uruchurtu, de

[...] las indignantes “razzias” de los esbirros de la Dirección de Mercados en contra de las pobres indígenas que, en uso del inalienable derecho de supervivencia, expendían sus miserables mercancías en las aceras urbanas (Carlos Alvear Acevedo, *Excelsior*, 15 de septiembre de 1966: 7A).

Cuatro poderosas centrales sindicales afiliadas al PRI, entre ellas la CTM y la Federación de Obreros Revolucionarios (FOR), también atacaron la “[...] injusticia que se comete en contra de los humildes comerciantes, los vendedores ambulantes, que son encarcelados y a los que se les decomisa su mercancía” (*Excelsior*, 15 de septiembre de 1966:9A).

Paradójicamente, las políticas de Uruchurtu hacia el ambulante —la construcción de mercados y la consecuente represión necesaria en contra de los vendedores— fueron originalmente un elemento clave de la base de su poder. La política no sólo agradó a las clases medias y aportó una fuente considerable de contratos lucrativos para la industria mexicana de la construcción, sino que también permitió a Uruchurtu organizar y manipular políticamente a los vendedores ambulantes para sus propios propósitos.

LA POLITIZACIÓN DEL COMERCIO AMBULANTE: COSTOS Y BENEFICIOS

Una sección de la reglamentación de mercados de 1951, permitía a los vendedores ambulantes integrar asociaciones civiles voluntarias que representaran sus intereses y, con objeto de evitar que las autoridades de la ciudad los desconocieran, exigieron que la Oficina de Mercados los reconociera siempre que congregaran

por lo menos a 100 miembros. Una vez que Uruchurtu se percató de que no podía simplemente “prohibir” la venta en la vía pública de un día para otro, sino que tenía que construir mercados para reubicarlos, debió tomar la decisión de cómo construirlos para los miles de vendedores independientes que había por toda la ciudad. Muy astutamente, delineó una política en la que sólo grupos “reconocidos” de por lo menos 100 vendedores ambulantes tendrían un mercado construido para ellos. Lo que era más importante, sólo a tales grupos se les permitiría vender en la calle *mientras se terminaba de construir el mercado*: por tanto, los que no fueran miembros de asociaciones “reconocidas” serían reprimidos.

Desde el punto de vista administrativo, las asociaciones civiles permitieron a los funcionarios de la ciudad y a los administradores de los mercados negociar con un solo organismo que representaba a todos los vendedores (o que al menos rendía cuentas de ellos) de una calle o mercado dados. En lo político, dichas asociaciones se vieron obligadas también a afiliarse al PRI y a apoyar las acciones políticas en favor de dicho partido.¹¹ Y, lo que resultó más importante, Uruchurtu usó a las asociaciones con el propósito de hacer avanzar su carrera personal. Para 1958, la hábil manipulación del programa de construcción de mercados ya rendía generosos beneficios en el ámbito político. El 12 de febrero de ese año, en un acto proselitista, 40 000 propietarios de locales y sus familias se congregaron para manifestar su apoyo político a López Mateos, y el presidente del PRI en el Distrito Federal, Rodolfo González Guevara, señaló que la campaña de 1958 había sido la primera en la cual los comerciantes en pequeño habían desempeñado un papel fundamental: algo que él atribuía directamente al programa de construcción de mercados. Lo más significativo era el hecho de que los líderes de los vendedores que se hallaban en los mercados, relacionaban abiertamente su apoyo a López Mateos con su promesa de continuar las políticas de Uruchurtu dentro de la ciudad (*Excelsior*, 1o. y 15 de febrero de 1958).

El cálculo de las fechas de inauguración de los mercados durante los dos períodos presidenciales en los cuales Uruchurtu fue regente de la ciudad, indica además que fueron elegidas para captar buena voluntad y apoyo inmediatos para él y el PRI. Si se compara la cantidad de vendedores que recibieron un local durante cada sección bianual de los sexenios de Ruiz Cortines y López Mateos, cuando Uruchurtu estaba en pleno cargo del Distrito Federal, resulta evidente que en el último período de dos años de cada sexenio (el inmediatamente anterior a las elecciones presidenciales) se daba un nivel mucho mayor que el normal en la construcción de mercados.

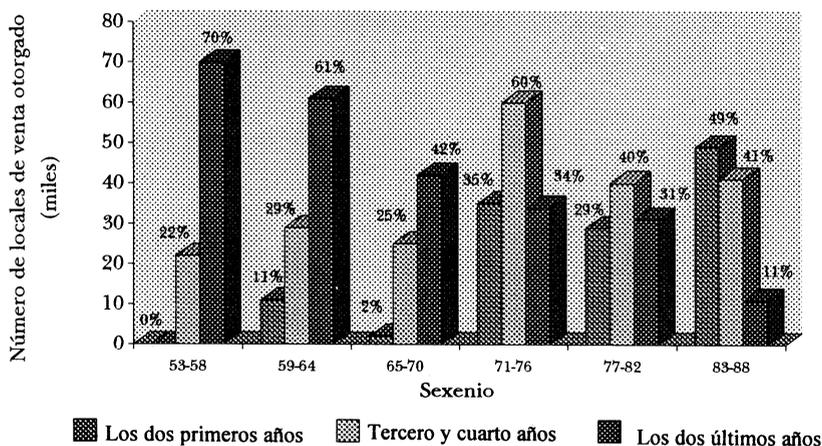
Como lo muestra la gráfica 2, 78% de todos los vendedores que se hallaban en mercados nuevos durante la administración de Ruiz Cortines, recibió sus locales en los dos últimos años de ese sexenio. Del mismo modo, 61% de todos los vendedores en mercados durante el período de Díaz Ordaz recibió sus locales durante la misma fase bianual. Lo que resulta más asombroso es que, en las administraciones siguientes, después de que Uruchurtu fue retirado del cargo, la proporción de puestos construidos durante el último período bianual cae a alrededor del

¹¹ Hasta donde yo puedo opinar, todas lo hicieron.

33%, la ocurrencia aleatoria esperada. Esto indica que Uruchurtu planeó deliberadamente como recurso político que la construcción de mercados coincidiera con el período justo antes de las elecciones presidenciales. El hecho de que esta política decayera significativamente después de concluida la administración de Uruchurtu, demuestra que el programa había dejado de funcionar en este sentido.

GRÁFICA 2

VENDEDORES EN MERCADOS A QUIENES SE OTORGÓ UN LOCAL POR PERÍODO SEXENAL (MEDIDO EN FASES DE DOS AÑOS)



FUENTE: Información original de DDF-Coabasto, 1991.

Esta misma politización del programa de mercados y del comercio ambulante fue la que de hecho selló en último término el destino de dicho programa. Puesto que se usó a los mercados para atraer a los vendedores al PRI, esta práctica resultó autolimitante debido a cuatro factores que serán señalados aquí y analizados a profundidad en la próxima sección. Primero, aunque la política de construcción de mercados había creado un gran conglomerado de asociaciones leales al PRI, esto se logró a un alto costo financiero. Segundo, para 1966, la mayoría de los vendedores ambulantes se encontraban en estructuras de mercado o bien las habían rechazado para regresar a la vía pública. Tercero, se dio una tendencia a que con el tiempo el apoyo de los vendedores menguara. Finalmente, el enorme subsidio de los vendedores en los mercados hizo que obtuvieran grandes ganancias y de hecho ocasionó que los consumidores solicitaran volver a los mercados de la calle.

LOS LÍMITES POLÍTICOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MERCADOS

El costo de los mercados

El programa de los mercados costó una gran cantidad de dinero para construir y mantener un complejo sistema que prácticamente no costaba nada a sus ocupantes y beneficiarios directos de los propios mercados. Mientras que no es posible hallar las cifras exactas, incluso en lo referente a costos de mantenimiento hoy en día (aunque resulta importante señalar que los vendedores actuales que se encuentran en mercados se han negado a aceptar un programa de “privatización” de las instalaciones que echaría sobre sus hombros los costos de mantenimiento), el presidente Ruiz Cortines anunció que sólo entre 1953 y 1958 se gastaron 350 millones de pesos en la construcción o reacondicionamiento de casi 90 mercados cubiertos, para dar cabida a los vendedores, más de siete veces el gasto para construir nuevas escuelas en un período de crecimiento anual de 6% en la población, y el equivalente a un poco más de todo el presupuesto del Distrito Federal en 1957 (“Texto del informe presidencial”, *Excelsior*, 2 de septiembre de 1958). Una sangría fiscal tan enorme a los recursos de la ciudad sólo podía justificarse si se alegaba que los mercados iban a producir beneficios políticos considerables, los cuales al principio fueron importantes pero después, reducidos.

EL RECHAZO A LOS MERCADOS

Uruchurtu nunca acabó totalmente con el ambulante. Aunque al principio los vendedores parecían complacidos con el programa de construcción de mercados, para muchos de ellos éstos no resultaron rentables y comenzaron un lento proceso de regreso a la vía pública. Muchas razones se dieron para ello: 1) falta de planeación adecuada de mercadeo para el nuevo centro comercial; 2) resistencia a un mayor nivel de control sobre los vendedores en los mercados, y 3) modificaciones en el carácter de la comercialización debido al cambio de espacio de transacción en la vía pública a las construcciones de los mercados cerrados.

Construidos en predios disponibles o zonas de poco valor catastral, los mercados generalmente no estaban tan bien ubicados como los de la vía pública a los que sustituyeron, lo cual significaba que tenían menos clientela. Aunque con el tiempo se hicieron de nuevos clientes, al parecer muchos vendedores se fueron durante esta fase inicial.¹² Además, las rentas simbólicas de ninguna manera eran el único costo para entrar en los mercados: amén de la persistencia de la corrupción (muchos de los administradores eran ex policías y muy susceptibles a dicha actividad; Eckstein, 1977), los funcionarios de la ciudad también aprovecharon a los mercados para obtener control sobre las actividades comerciales de los vendedores de formas que resultaban complicadas o imposibles en la vía pública, tales

¹² Pyle (1968) se valió de las bajas tasas de vacantes en muchos de los mercados para señalar que habían sido un fracaso.

como imponer horarios y “giros” regulatorios o líneas de productos. Un tercer factor fue que el mero cambio de espacio de la transacción pública a un mercado modificó el carácter de la venta. Debido a su ubicación en un espacio público, un mercado de la calle no sólo es un sitio para realizar transacciones económicas privadas: es un lugar de socialización, para comer y ser visto, conversar con vecinos y amigos, y un sitio para ver lo que hay en existencia y lo que nos gusta. Por otra parte, los mercados públicos imponen más restricciones en el sentido de que el espacio cerrado da una sensación de propiedad ajena y, por tanto, uno debe tener un “propósito” específico para estar ahí. Asimismo, esto exigía a los vendedores adaptar su estrategia de mercadeo, para lo cual unos cuantos estaban preparados.

Por estas y otras razones, la reubicación de los mercados que prosperaron en la vía pública en mercados cerrados dañó el atractivo comercial de barrios enteros. Para mediados de 1953, incluso los vendedores establecidos de la elegante colonia Polanco solicitaban al DDF que dejaran regresar a los vendedores ambulantes, con el argumento de que sus ventas habían caído 50%, mientras que otros barrios donde los vendedores se habían quedado experimentaban un aumento en sus ventas (“Distrito Federal”, en *Excelsior*, 20 de junio de 1953). Muchos vendedores de este período a quienes entrevisté, declararon que sufrieron pérdidas aún mayores y que sus ahorros se habían esfumado. Algunos se dedicaron a la venta de puerta en puerta, otros tuvieron que emplearse en fábricas, en tanto que otros sencillamente se fueron a zonas donde los mercados se encontraban en construcción, con el fin de hacer negocio con un local obtenido gratis y revenderlo a las cuantas semanas.

Un buen ejemplo lo constituye la zona obrera de Tepito, la cual —localizada cerca de la zona del centro y a un kilómetro del Zócalo—, se había transformado en un gran espacio de venta en la vía pública desde finales del siglo pasado (Vázquez Torres, 1991). Objetos usados, a menudo de muy dudosa procedencia —lo cual daba a la zona el nombre del “mercado de los rateros”—, eran vendidos en casuchas de madera construidas a la mitad de la calle y que en muchos casos cumplían también la función de casas habitación. Estos vendedores realizaron algunas protestas cuando se construyeron los mercados y sus locales y hogares fueron destruidos en 1957;¹³ empero, Alfonso Hernández Hernández, cronista de Tepito y funcionario de la delegación Cuauhtémoc, sostiene que después de tres años los vendedores comenzaron a abandonar los mercados al enfrentarse a la posibilidad de una total ruina financiera si se quedaban en ellos. En algunos casos, vendieron los derechos de sus locales;¹⁴ en otros, sencillamente los dejaron

¹³ Protestas más significativas fueron realizadas por los residentes de zonas destinadas a ser demolidas con el fin de crear espacio para los nuevos mercados.

¹⁴ Supuestamente esto es ilegal, ya que los locales de los mercados, al igual que la tierra ejidal, fueron diseñados para ser “inalienables”, para el beneficio exclusivo de los vendedores a quienes originalmente les habían sido otorgados. En la práctica, si un vendedor hallaba a alguien interesado en comprar su local, podía cobrar por él si pagaba un cohecho considerable a los administradores del mercado para que cambiaran el nombre en las listas oficiales. De esta manera, algunos vendedores han acumulado una gran cantidad de locales que han comprado a otros. Puesto que sólo se permite

vacantes, con lo cual renunciaban a todo derecho sobre ellos. Ahora se sabe que uno de los mercados de Tepito (que actualmente ostenta el nombre del “mercado de calzado más grande del mundo”, después de que cada uno de sus 700 puestos comenzaron a especializarse en zapatos) está controlado por siete familias que compraron los locales de la mayoría de los otros vendedores cuando abandonaron el mercado.¹⁵

EL DESCENSO EN EL APOYO PROVENIENTE DE LOS VENDEDORES DE LOS MERCADOS

Incluso en el caso de los vendedores que permanecieron en los mercados, su afiliación al PRI no garantizaba que siguieran siendo tan activos en su apoyo como lo habían sido al principio. Aunque en un primer momento podía considerarse a los vendedores como una base poderosa de apoyo, su necesidad de seguir apoyando al partido disminuyó cuando sus títulos estuvieron asegurados. Una vez concedidos, no podía despojárseles fácilmente de sus locales y, por lo tanto, el PRI no podía ejercer una amenaza efectiva contra los vendedores con objeto de mantener su lealtad. Por otra parte, puesto que los vendedores ambulantes nunca obtuvieron ninguna forma de título legal sobre sus “espacios” en la vía pública, y obligados por su falta de seguridad, se vieron en la necesidad de realizar una constante actividad política para poder conservar sus “derechos”. El único “servicio” que el PRI podía ofrecer a los vendedores de los mercados, por otro lado, era mantener rentas simbólicas, lo cual evitó que la ciudad recuperara el enorme costo que había tenido el programa de mercados.

SUBSIDIOS Y GANANCIAS

Finalmente, uno de los principales argumentos retóricos para ejercer acción en contra del ambulante fue atacar el problema del “intermediarismo” y del “saturado sistema comercial” que, según Uruchurtu, era la causa principal de la inflación. Obviamente, el simple cambio de pequeños vendedores al menudeo de las calles a mercados cubiertos no podía hacer nada para resolver el “problema” del intermediarismo, pues los vendedores compraban en gran medida a los mismos proveedores. Por otra parte, la justificación oficial para el enorme subsidio del comercio minorista que el programa de construcción entrañaba era que esto podría reducir el costo a los consumidores en las zonas “populares”. Sin embargo, puesto que la política de Uruchurtu también perseguía (con el propósito de proteger su inversión económica y política en los vendedores que se hallaban

han acumulado una gran cantidad de locales que han comprado a otros. Puesto que sólo se permite tener un local por persona, los vendedores usan “prestanombres”, habitualmente familiares que se encuentran en la lista como locatarios pero que de hecho no tienen ningún control sobre los locales.

¹⁵ Para obtener mayores detalles acerca del ambulante en Tepito, consúltese Couffignal (1987) y Tomas (1990).

en los mercados) reducir la competencia “desleal” que ejercían los vendedores ambulantes e incluso los supermercados contra los mercados, sencillamente no había incentivos para que los vendedores que estaban en los mercados redujeran sus precios o siquiera racionalizaran sus estrategias de compra y comercialización para hacer posible bajar los precios. Como me comentara un funcionario que llegó a la Oficina de Mercados en 1968: “Noventa por ciento de los comerciantes que han estado vendiendo [en los mercados] durante 20, 30, o 40 años se han hecho muy ricos porque el gobierno les ha dado todo”. En vez de compartir sus ahorros, la falta de competencia permitió que los vendedores que estaban en los mercados simplemente amasaran riqueza a expensas de los consumidores —que no se perdía en los vecinos de muchos mercados—, quienes a menudo se quejaban de los altos precios y del mal servicio, y en muchos casos solicitaban que se regresara a la venta en la vía pública con objeto de reducir los precios.

Los factores mencionados se reforzaron mutuamente para producir con el tiempo una reducción constante de la tasa política de rendimiento proveniente del programa de construcción de mercados. Aunque los costos de construcción y administración se elevaron, los beneficios políticos se redujeron hasta que los fantásticos gastos se salieron de la congruencia. Al mismo tiempo, el programa de construcción de mercados requirió una campaña masiva de aplicación para obligar, por un lado, a los vendedores ambulantes a entrar en los mercados y, por otro, a evitar que compitieran con los mercados. Así pues, aun cuando el programa de construcción produjo beneficios políticos cada vez más reducidos en lo referente a un apoyo decreciente por parte de los vendedores que habían sido ubicados en mercados, por otra parte produjo más y más obligaciones políticas en función de sus ataques a los vendedores ambulantes. En suma, dichas estrategias no eran ya política o económicamente viables. Ya no se podía hacer entrar en los mercados a los vendedores ambulantes y, al aplicarles rígidas leyes, el PRI sólo consiguió alejarlos mientras la administración de la ciudad (y por extensión la administración nacional) proyectaba asimismo una imagen autoritaria y dictatorial en el plano nacional e internacional.

También debemos tomar en consideración los aspectos políticos más amplios de la escena política mexicana. Una década y media de crecimiento había despertado esperanzas de mejoramiento en los aspectos tanto político como económico del panorama interno de México, ninguno de los cuales llegó tan pronto como se había previsto. Al mismo tiempo, el control político había sido virtualmente monopolizado por el ala derecha del PRI mediante una sucesión de presidentes antipopulistas. Durante ese período comenzó una inquietud política cada vez mayor, sobre todo entre las clases medias. El movimiento estudiantil (que en último término fuera reprimido por el ejército en una masacre que costó cientos de vidas en octubre de 1968) tenía ya una presencia considerable que se hacía cada vez más poderosa. Como hace notar Cornelius (1975), sencillamente no era posible que el Estado continuara enajenando a una parte cada vez mayor de las clases “populares” durante este período. Así como el PRI llegó a estar íntimamente ligado a asuntos de invasión de predios en esta época, también necesitaba hacerse de aliados, no de enemigos, entre los vendedores ambulantes.

Por ende, el programa de Uruchurtu sobre construcción de mercados había pasado de ser un bien político para el PRI en 1958, a convertirse en una responsabilidad financiera y política de enormes proporciones para 1966. El haber arrasado a una comunidad de invasores de predios no era tan sólo un pretexto para deshacerse de un rival político, sino un síntoma del peligro mismo que Uruchurtu planteaba al régimen. Ahora se interponía en el camino de los intentos que hacía el PRI por consolidar el apoyo de las clases bajas, debido a su negativa a permitir a los invasores de predios o a los vendedores ambulantes incorporarse dentro de la estructura político-administrativa.

Sin embargo, el programa de construcción de mercados (como Uruchurtu lo llevó a la práctica) estableció dos precedentes que resultan decisivos para explicar el poder que tienen los vendedores ambulantes hoy en día. En primer lugar, al exigir que los comerciantes de la vía pública fueran miembros de una asociación civil para poder considerar otorgarles un local en un mercado o ser “tolerados” en la calle, Uruchurtu sentó las bases para los poderosos sindicatos de vendedores ambulantes que existen en la actualidad. En vez de las asociaciones civiles “voluntarias” contempladas por la regulación de mercados de 1951, las políticas de Uruchurtu dieron a los líderes de las asociaciones poder ilimitado sobre sus miembros, ya que les confirió —a ellos, no a la ciudad— el poder último sobre la sobrevivencia del vendedor individual, quien no podía obtener un local o una “tolerancia” sin la anuencia del líder.

En segundo lugar, las políticas de Uruchurtu no sólo incrustaron firmemente dentro del PRI a los vendedores que estaban en los mercados, también proporcionaron un modelo que las futuras asociaciones pudieron seguir: otorgar lealtad a un patrón político (por lo regular dentro del PRI, pero más tarde también dentro de otros partidos) a cambio de apoyo recíproco de su “derecho” a ocupar un mercado o una calle. Los vendedores ambulantes aprendieron, antes que nada, que si resistían en una zona durante cierto tiempo, la ciudad podía reconocer su “derecho” a ella o bien —al menos— construir cerca un mercado para ellos.

CONCLUSIÓN

En el teatro, una tragedia es aquella en la que un defecto fatal en la naturaleza del personaje central desvirtúa sus nobles intenciones y esto acarrea resultados trágicos. Es decir, en una verdadera tragedia el antagonista es derrotado no por la naturaleza o por sus semejantes, sino por sí mismo. Todos los elementos que hicieron fracasar el intento de retirar de la vía pública a los vendedores ambulantes, intento que continúa hasta ahora, se originan básicamente en las políticas particulares que Uruchurtu puso en vigor para obtener los dos objetivos de eliminar al ambulante, al mismo tiempo que creaba un grupo clientelar dependiente de vendedores de la vía pública que apoyaran su propia carrera política. Dichas metas exigieron que Uruchurtu se enfrascara en un ambicioso programa de construcción de mercados, al mismo tiempo que conducía la política de represión más

violenta contra el ambulante en la historia moderna de México. Con el tiempo, fueron las exigencias de estas dos políticas en sí mismas las que en gran medida trajeron consigo la caída de Uruchurtu.

No obstante, el legado más importante de Uruchurtu es la manera como ayudó a enmarcar las relaciones entre los vendedores ambulantes y la ciudad, que más tarde permitió al ambulante resurgir con creces. Nunca fue la intención de las nuevas autoridades de la ciudad que sustituyeron a Uruchurtu permitir el espectacular crecimiento del ambulante que se dio en las tres décadas siguientes. Más bien, simplemente deseaban revertir una situación que se había vuelto políticamente insostenible para el PRI y económicamente incosteable para el Estado. Sin embargo, las políticas de Uruchurtu habían politizado radicalmente al ambulante al manipular el programa de construcción de mercados como incentivo para que los vendedores de la vía pública se organizaran dentro del PRI y como recompensa por la lealtad hacia sus propios objetivos políticos. Con el propósito de capitalizar los beneficios políticos de organizar a los vendedores ambulantes de la misma manera que Uruchurtu había organizado a los comerciantes que se encontraban en los mercados, sus sucesores cometieron el error fatal de seguir aplicando la letra de sus políticas sin su espíritu, con lo cual siguieron fomentando la creación de organizaciones de vendedores ambulantes.

Lo que sucedió poco después de que Uruchurtu fuera obligado a renunciar es que el programa de construcción de mercados fue desmantelado en favor de otros programas, como el del sistema de transporte colectivo, el metro. Empero, los funcionarios siguieron obligando a los grupos de vendedores a organizarse en asociaciones que tenían que probar su lealtad al PRI con objeto de ser "tolerados" en las calles. Por ejemplo, para 1968, más de 10 000 vendedores ya habían sido autorizados a vender en "tianguis" (Pyle, 1978). Las autoridades ocultaron el hecho de que estaban permitiendo que el ambulante resurgiera con la quimera de que estaba "tolerándose" a los grupos sólo hasta que se construyeran los mercados, con lo cual aplicaban básicamente la letra de las políticas de Uruchurtu, pero negaban su espíritu pues ni los funcionarios ni los vendedores tenían interés alguno en la construcción de los mercados. No obstante, como se señaló al principio de este artículo, al obligar a los vendedores ambulantes a formar asociaciones gremiales, la ciudad les otorgó un poder decisivo sobre los vendedores individuales, lo cual permitió a los líderes de dichas asociaciones manipular a sus miembros en todas las formas que consideraron necesarias, con el propósito de defender sus intereses: aumentando la cantidad de sus miembros; su espacio en la vía pública y, finalmente, el "fenómeno" del ambulante a un nivel sin precedentes en la historia de México.

BIBLIOGRAFÍA

- Baca, Pedro, 1990, "Las zarinas de las banquetas", *Contenido*, México, agosto.
- Bromley, Ray, 1978b, "Organization, Regulation and Exploitation in the So-Called 'Urban Informal Sector': The Street Traders of Cali, Colombia", *World Development* 6: 1161-1172, Pergamon Press Ltd., Nueva York.
- Cámara Nacional de Comercio (Canaco), 1987, *La economía informal*, México.
- Cámara Nacional de Comercio (Canaco), 1990, *Economía informal. ¿Quién provee a los ambulantes?*, 3a. ed., México.
- Camp, Roderic A., 1976, *Mexican Political Biographies: 1935-1975*, The University of Arizona Press, Tucson.
- Camp, Roderic A., 1980, *Mexico's Leaders: Their Education and Recruitment*, University of Arizona, Tucson, 239 pp.
- Camp, Roderic A., 1990, "Camarillas in Mexican Politics: The Case of the Salinas Cabinet", *Mexican Studies*, vol. 6, University of California Press, Berkeley, pp. 85-107.
- Centro de Estudios Tepiteños (Cetepi), 1991, "El ambulante en el centro histórico", informe inédito.
- Cornelius, Wayne A., 1975, *Politics and the Migrant Poor in Mexico City*, Stanford University Press, Stanford.
- Couffignal, Georges, 1987, "Misterioso Tepito", *Trace*, núm. 11, Centre Français d'Études Mexicaines et Centraméricaines, México.
- Cross, John C., 1992, "Studying Streetvending in Mexico City", *Mexico Policy News*, núm. 8, San Diego State University, San Diego, Ca., pp. 17-18.
- Davis, Diane E., 1994, *Urban Leviathan: Mexico City in the Twentieth Century*, Temple University Press, Filadelfia.
- Departamento del Distrito Federal (DDF), 1990, *Diagnóstico y propuesta de ordenamiento del comercio en la vía pública del centro histórico de la ciudad de México*, México, marzo.
- Departamento del Distrito Federal (DDF), 1991, "Comercio en la vía pública, su reubicación, una decisión política", documento interno inédito del DDF, agosto.
- Departamento del Distrito Federal (DDF), 1991, "Directorio de mercados públicos y concentraciones", documento interno inédito.
- Departamento del Distrito Federal (DDF), 1992, "Programa inmediato de mejoramiento del comercio popular", documento interno inédito del DDF, agosto.
- Departamento del Distrito Federal (DDF)-Coabasto, 1985, "Proyección del número de tianguis para 1988", documento interno inédito, 25 de abril.

- Departamento del Distrito Federal (DDF)-Secretaría General de Gobierno, 1992, "Programa de mejoramiento del comercio en la vía pública", documento interno inédito, febrero.
- De la Peña, Guillermo, 1992, "¿Una nueva cultura política?", en Jorge Alonso, Alberto Aziz y Jaime Tamayo (comps.), *El nuevo Estado mexicano, IV: Estado y sociedad*, Nueva Imagen, México.
- De Soto, Hernando, 1989, *The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World*, Harper & Row, Nueva York, traducción del español; la publicación original apareció en 1986.
- Eckstein, Susan, 1977, *The Poverty of Revolution; The State and the Urban Poor in Mexico*, Princeton University Press, Princeton, N. J.
- Escobar Latapí, Agustín, 1990, "Estado, orden político e informalidad: notas para discusión", *Nueva Antropología*, México, 40:23-40.
- Excélsior*, México, 18 de diciembre de 1952; 20 de junio de 1953; 2 de septiembre de 1958; 10 y 15 de febrero de 1958; 15 de septiembre de 1966.
- Gómez Castro, Arturo, 1963, *¿Quién será el futuro presidente de México?*, Editorial Veracruz, México.
- González Casanova, Pablo, 1965, *La democracia en México*, Ediciones Era, México.
- Hofstadter, Dan (comp.), 1974, *México 1946-1973*, Facts on File, Inc., Nueva York.
- Lerner de Sheinbaum, Bertha y Susana Ralsky de Cimet, 1976, *El poder de los presidentes: alcances y perspectivas (1910-1973)*, Instituto Mexicano de Estudios Políticos, México.
- McGee, T. G., 1973, *Hawkers in Hong Kong*, University of Hong Kong, Center for Asian Studies, Monographs and Occasional Papers, núm. 17.
- México, 1951, "Reglamento de mercados" [del Distrito Federal], *Diario Oficial*, 10. de junio de 1951, pp. 6-15.
- México-Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (INEGI), 1990, *Encuesta nacional de economía informal*, México, INEGI.
- Monge, Raúl, 1993, "No tienen cabida los pobres en la utopía urbana de Camacho", *Proceso*, México, núm. 864, 24 de mayo de 1993, pp. 10-13.
- Pyle, Jane, 1968, *The Public Markets of Mexico City*, University Microform Library Service, Ann Arbor.
- Pyle, Jane, 1978, "Tianguis: Periodic Markets of Mexico City", en Robert H. T. Smith (comp.), *Marketplace, Trade-Periodic Markets, Hawkets, and Traders in Africa, Asia and Latin America*, Centre for Transportation Studies, Vancouver.
- Ramírez, Miguel D., 1986, "Mexico's Development Experience, 1950-1984", *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 28:39-66, University of Miami, Fl.

- Smith, Peter, 1979, *Labyrinths of Power: Political Recruitment in Twentieth Century Mexico*, Princeton University Press, Princeton.
- Story, Dale, 1986, *The Mexican Ruling Party: Stability and Authority*, Praeger, Nueva York.
- Tokman, Victor E., 1978b, "Competition Between the Informal and Formal Sectors in Retailing: The Case of Santiago", *World Development* 6: 1187-1198, Pergamon Press Ltd., Nueva York.
- Tomas, François, 1990, "Tepiteños", *Trace*, núm. 17, Centre Français d'Études Mexicaines et Centraméricaines, México.
- Vázquez Torres, Ignacio, 1991, *El abasto en la ciudad de México*, Coabasto, México.
- Ward, Peter, 1990, *Mexico City: The Production and Reproduction of an Urban Environment*, Bellhaven Press, Londres.